



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-008-2019-00032-02 (O2-22-216)
Demandante: JAIRO EMILIO ZAPATA CASAS
Demandadas: AFP PROTECCIÓN S.A., COLPENSIONES E.I.C.E. y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Procedencia: JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: AUTO INTERLOCUTORIO No.050 DEL 16 DE AGOSTO DE 2022
Asunto: LIQUIDACIÓN DE COSTAS

En Medellín, a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-008-2019-00032-02 (O2-22-216), instaurado por **JAIRO EMILIO ZAPATA CASAS** en contra de la **AFP PROTECCIÓN S.A., COLPENSIONES E.I.C.E. y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** en punto a resolver el Recurso de Apelación propuesto por JAIRO EMILIO ZAPATA CASAS, contra la liquidación de costas aprobada el 03 de marzo de 2022 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín.

1. ANTECEDENTES

El señor JAIRO EMILIO ZAPATA CASAS, actuando por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la AFP PROTECCIÓN S.A., COLPENSIONES E.I.C.E. y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en procura de que se declarara la nulidad y/o ineficacia de su afiliación al RAIS, que ha permanecido afiliada al RPMPD sin solución de continuidad, y que le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez; así mismo, para que se condenara a la AFP PROTECCIÓN S.A. a trasladar al RPMPD todos y cada uno de los aportes efectuados al RAIS, se ordenara a COLPENSIONES E.I.C.E. recibir el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, y se condenara a COLPENSIONES E.I.C.E. a reconocerle y pagarle la pensión de vejez, junto con los intereses de mora, o en subsidio, la indexación.

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 11 de agosto de 2020 (doc.05), por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, con sentencia en la que se declaró la ineficacia del traslado de régimen; se ordenó a la AFP PROTECCIÓN S.A. trasladar al RPMPD todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la actora, incluidas las cotizaciones, cuotas de administración, y sumas adicionales de la aseguradora, con los rendimientos que se hubieren causado; se ordenó a la AFP PROTECCIÓN S.A. trasladar a la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO el valor del bono pensional indexado; se ordenó a COLPENSIONES E.I.C.E. recibir los aportes provenientes del RAIS, a reconocer en favor del actor la pensión de vejez prevista en la Ley 797 de 2003, a partir del día siguiente a la última cotización, en razón de 13 mesadas anuales, y a pagar de forma indexada las mesadas que retroactivamente se causaren, retroactivo sobre el cual autorizó descontar los aportes para el Sistema General de Salud; se declararon improbadas las excepciones formuladas; se absolvió a COLPENSIONES E.I.C.E. de la pretensión referida al reconocimiento de los intereses de mora; y se condenó en costas a la AFP PROTECCIÓN S.A., en favor del demandante, fijándose como agencias en derecho la suma de \$877.803, equivalente a un (1) SMMLV.

El recurso de apelación formulado por la AFP PROTECCIÓN S.A., y el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de COLPENSIONES E.I.C.E., se desataron el 25 de junio de 2021 (doc.06, subcarp.01, carp.02) por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, sentencia en la que se modificó la decisión de primer grado en el sentido de ordenar a la AFP PROTECCIÓN S.A. trasladar todos los valores que el actor tenga en su cuenta de ahorro individual como cotizaciones, intereses, rendimientos, bonos pensionales y sumas adicionales de aseguradora; así como los valores correspondientes al porcentaje que por gastos o comisión de administración haya descontado de las cotizaciones; lo descontado para el fondo de garantía de pensión mínima, y las sumas de la aseguradora (primas previsionales). Adicionalmente, la decisión de primer grado se modificó en el sentido de revocar la condena impuesta por concepto de devolución del bono pensional, respecto de la cual absolvió al fondo privado accionado; y en el sentido de indicar que el retroactivo pensional causado en favor del demandante, entre el 01 de noviembre de 2017 y el 31 de mayo de 2021, ascendía a la suma de \$82.476.359; y que la mesada por cancelar a partir del 01 de junio de 2021 ascendía a la suma de \$1.844.538. Las costas de la segunda instancia fueron impuestas a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A. y en favor del señor JAIRO EMILIO ZAPATA CASAS, fijándose como agencias en derecho la suma de \$908.526, equivalente a un (1) SMMLV.

1.1. Trámite de Primera Instancia

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, en la fecha 03 de marzo de 2022 (doc.22, carp.01) emitió el auto de cúmplase lo dispuesto por el superior funcional, y dispuso que por la Secretaría del despacho se liquidaran las costas del proceso, las cuales se liquidaron a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A. y en favor del señor JAIRO EMILIO ZAPATA CASAS, en la suma de \$1.786.329, discriminada en \$877.803 para la primera instancia, y \$908.526 para la segunda instancia, liquidación sobre la que se impartió aprobación en la misma fecha.

1.2. Recurso de Apelación

Inconforme de la decisión antes descrita, el apoderado judicial del señor JAIRO EMILIO ZAPATA CASAS, en la fecha 09 de marzo de 2022 (doc.23), interpuso el recurso de apelación, solicitando que se modifique la tasación de las agencias en derecho, fijándolas en suma equivalente al 7,5% del valor del retroactivo pensional reconocido, siendo que el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 establece un monto mínimo del 3%, y que en el proceso de la referencia incluso se practicaron pruebas testimoniales.

1.3. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación se admitió el 28 de junio de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del 05 de julio del mismo año (doc.03, carp.01), se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo del caso, sin que ninguna de partes hubiere radicado alegaciones finales.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor JAIRO EMILIO ZAPATA CASAS, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema Jurídico

El punto neural del debate se contrae en determinar si la liquidación de las agencias en derecho causadas en el trámite del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por JAIRO

EMILIO ZAPATA CASAS en contra de la AFP PROTECCIÓN S.A., COLPENSIONES E.I.C.E. y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO se ajusta o no a la normativa que regula la materia.

2.2. Tesis de la Sala

La Sala modificará la decisión de primer grado, y en su lugar, fijará las agencias en derecho de la primera instancia en suma equivalente a dos (2) veces el SMLMV para la fecha en la que se profirió la sentencia de primera instancia, advirtiendo que dicho monto se ajusta a los parámetros fijados por el Consejo Superior de la Judicatura, y corresponde a un criterio más equitativo, razonable, prudente y proporcional, respecto de la naturaleza, calidad y la duración de la gestión profesional desplegada.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La Corte Constitucional ha entendido que las costas corresponden a aquellos gastos en que incurren las partes en razón del proceso, noción que comprende tanto las expensas como las agencias en derecho [C-043 de 2004]. En esta materia el ordenamiento procesal adoptó un criterio objetivo, no solo para la imposición de la condena, en tanto se condena en costas al vencido en el proceso, incidente o recurso, independientemente de las causas del vencimiento [C-480 de 1995], sino también para la tasación de aquellas, en cada uno de sus componentes, siguiendo en este punto la teoría moderna procesal, pues, como lo ha señalado la doctrina “... *la característica moderna del principio de condena en costas consiste precisamente en hallarse condicionada al vencimiento puro y simple, y no a la intención ni al comportamiento del vencido (mala fe o culpa)*” [José Chiovenda, La Condena en Costas, trad. Juan de la Puente y Quijano, Tijnana, B.C, 1985, pág. 220].

En relación con la condena en costas, el artículo 365 del CGP, aplica el *dictum romano*, según el cual, quien ha sido vencido en un proceso judicial, debe pagar al vencedor los gastos o costas del juicio, y justo en ese sentido, ha dicho la doctrina que las costas equivalen a “... *la carga económica que debe afrontar quien no tenía razón [en el juicio] motivo por el cual obtuvo decisión desfavorable y comprende, a más de las expensas erogadas por la otra parte, las agencias en derecho, o sea el pago de los honorarios de abogado que la parte gananciosa efectuó, y a la que deben ser entregados*” [Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil, Tomo I, p. 1032].

Desde esta perspectiva, el artículo 365 del CGP prevé lo siguiente:

“Artículo 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción” (Subrayas de la Sala)

Ahora bien, las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, el transporte, alimentación y alojamiento del personal que intervenga en las diligencias que se practiquen por fuera del despacho judicial, y los aranceles, entre otros, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles, y correspondan a actuaciones autorizadas por la Ley (artículo 364 del CGP). Por su parte, las agencias en derecho corresponden a los gastos que

se generan por concepto de apoderamiento, los cuales el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora, atendiendo a los criterios sentados en el artículo 366 del CGP, y que no necesariamente deben corresponder a los honorarios reconocidos y pagados por dicha parte a su abogado [C-539 de 1999].

En torno de la liquidación de dichos conceptos el artículo 366 del CGP se estatuye:

“Artículo 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obediencia a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:

- 1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.*
- 2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso.*
- 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.*

Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará.

- 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.*

- 5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho sólo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto suspensivo”*
(subrayas de la Sala)

Para los efectos antes descritos, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el **Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016**, aplicable al caso objeto de análisis, y en relación con el asunto que nos ocupa fijó las siguientes tarifas de agencias en derecho para el área laboral:

“Artículo 5. TARIFAS. Las tarifas de agencias en derecho son:

1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL

- En única instancia*
- a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido.*
 - b. En aquellos autos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 smlmv.*
- En primera instancia*
- a. Por cuantía: Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario*
 - (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido*
 - (ii) De mayor cuantía; entre el 3% y el 7,5% de lo pedido.*
 - b. Por la naturaleza del asunto: En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 smlmv.*
- En segunda instancia* Entre 1 y 6 smlmv”.

Es claro entonces, que las normas señaladas establecen criterios de carácter cualitativo y cuantitativo para que el juzgador fije tales agencias, sin que se pueda imponer de manera automática el valor de dicha importe, pues simplemente orientan al juez para que éste, haciendo un ejercicio discrecional ponderativo, fije un monto que considere equitativo, razonable, prudente y proporcional con el valor de la condena o la absolución impartida, justipreciando la duración y calidad de la gestión profesional realizada en el transcurso del proceso, teniendo como límites máximo y mínimo los fijados por la ley y reglamentos, pero sin que ello signifique que el fallador esté condicionado a fijar como agencias el tope máximo referenciado, sino que tal condena puede ondear entre los límites mínimo y máximo que la normatividad en mención contempla.

Una vez revisado el expediente, la Sala advierte que la demanda se radicó el 21 de enero de 2019 (pág.02, doc.01, carp.01), se admitió el 04 de febrero del mismo año (pags.33-34, doc.01, carp.01), se notificó a la AFP PROTECCIÓN S.A. el 05 de abril de 2019 (pág.46, doc.01, carp.01), y se dirimió en primera instancia el 11 de agosto de 2020 (doc.05, carp.01).

También se constató que la actuación desplegada por el apoderado judicial de la parte actora, consistió en la presentación de la demanda (págs.05-10, doc.01, carp.01), la comparecencia e intervención a la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación el litigio y decreto de pruebas (págs.224-227, docs.01, carp.01), y la comparecencia a la audiencia de trámite y juzgamiento (doc.05, carp.01).

Adicionalmente, se encuentra acreditado que el proceso de la referencia es de naturaleza ordinaria, y de poca complejidad, en razón de los claros e iterativos lineamientos emitidos por la jurisprudencia del máximo órgano jurisdiccional, frente a la procedencia de las pretensiones incoadas; y que **la primera instancia se surtió en 568 días**, esto es, cerca de dos años, al margen de las contingencias que trajo consigo la Pandemia del Covid-19.

Así las cosas, la Sala modificará las agencias en derecho fijadas para la primera instancia, tasándolas en la suma de \$1.755.606, equivalentes a dos veces el salario mínimo legal mensual vigente para la fecha en que se profirió la sentencia de instancia ($2021 = \$877.803 * 2 = \$1.755.606$), cifra que se estima más equitativa, razonable, prudente y proporcional, a juzgar por la naturaleza, calidad y la duración útil de la gestión profesional desplegada, a sabiendas de que el tope máximo y límite mínimo autorizados, fluctúan entre 1 y 10 SMLMV.

Finalmente, la Sala advierte que no son de recibo las consideraciones expuestas por el recurrente en procura de que las agencias en derecho sean tasadas con relación al valor del retroactivo pensional reconocido, siendo que dicha condena fue impuesta a cargo de COLPENSIONES E.I.C.E., y que las costas del proceso fueron imputadas a la AFP PROTECCIÓN S.A., a la que únicamente se le gravó con la obligación de trasladar los aportes efectuados por el demandante.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º, artículo 365 del CGP, no se impondrán costas procesales en esta instancia, por no haberse causado, y en la medida de su no comprobación.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**, Sala Quinta de Decisión Laboral,

4. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la liquidación de costas aprobada el 03 de marzo de 2022 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por JAIRO EMILIO ZAPATA CASAS en contra de la AFP PROTECCIÓN S.A., COLPENSIONES E.I.C.E. y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en el sentido de fijar las agencias en derecho de la primera instancia en la suma de \$1.755.606, a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A. y a favor del señor JAIRO EMILIO ZAPATA CASAS.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, en los términos previstos en el artículo 41 literal c) del estatuto instrumental laboral.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

(sin firma por ausencia justificada)
JULIO RAFAEL TRODECILLA PAYARES
Magistrado


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas, corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

**LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:**

Que esta providencia fue notificada en los
ESTADOS No.144, fijados en la secretaría del
Tribunal, hoy **17 de agosto de 2022** a las
08:00am, los cuales pueden ser consultados en
["Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"](#)

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario